

La continuidad ante la crisis. La trayectoria identitaria del peronismo cordobés y los acontecimientos de 2001 en la Argentina ¹

Juan Manuel Reynares*

Resumen

El siguiente artículo indaga sobre la trayectoria identitaria del peronismo cordobés durante los años 2001 y 2002, es decir, el período de recrude-

¹ Este artículo es parte de una investigación de más largo alcance, cuyos resultados fueron reunidos en mi Tesis Doctoral bajo el título *El neoliberalismo cordobés. La trayectoria identitaria del peronismo provincial entre 1987-2003*, presentada en diciembre de 2014 el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. A su vez, puede encontrarse una versión previa y no publicada de este artículo en http://americano.usal.es/iberoame/sites/default/files/Paper_Iberoamerica_Reynares.pdf.

* Investigador Asistente CONICET y docente con lugar de trabajo en el Instituto Académico-Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María.

Código de Referato: SP.236.XLV/18

<http://dx.doi.org/10.22529/sp.2018.45.06>



STUDIA POLITICÆ

SP

Número 45 invierno 2018 – pág. 155-180

Publicada por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales,
de la Universidad Católica de Córdoba, Córdoba, República Argentina.

cimiento del ciclo de protesta y movilización social que alcanzó su auge en diciembre de 2001. La literatura que ha estudiado esta etapa tiende a subrayar que no provocó transformaciones sustanciales en la política provincial. El caso cordobés parece caer dentro de esta regla, ya que el peronismo provincial, a la cabeza de una alianza conocida como Unión por Córdoba (UpC), fue reelecto en 2003. Profundizando en lo que supone esa persistencia, el objetivo aquí es rastrear los modos en que este actor político dio sentido a la crisis y planteó posibles soluciones. La conjetura que estructura este artículo es que en 2001 y 2002 la trayectoria identitaria del peronismo cordobés continuó sobredeterminada por un discurso neoliberal que había configurado su propuesta de gobierno provincial a fines de los noventa, y que no varió frente a la crisis. Para fundamentar tal hipótesis, se analizará desde la Teoría Política de Discurso la línea política del peronismo cordobés entre 2002 y 2003, comparándola diacrónicamente con su campaña para la gobernación de 1998 y con su fundamentación de la reforma provincial llevada adelante en 2000, para rastrear la continuidad de su trayectoria ante la proliferación de demandas que eclosionó en 2001.

Palabras clave: Peronismo de Córdoba, trayectoria identitaria, discurso neoliberal, crisis del 2001.

Abstract

This article investigates the identity trajectory of the Córdoba Peronism during 2001 and 2002, that is to say, during the protest and mobilisation cycle that reached its peak in December 2001. The existing literature on this period underlines that it did not cause substantial transformations in subnational politics. The Córdoba case seems to fall under this rule: local Peronism, leading a party alliance known as “Unión por Córdoba”, was re-elected in 2003. Taking this into account, in this article we intend to trace the means by which this political actor gave meaning to the crisis and set out possible solutions. The conjecture that structures this article is that during 2001 and 2002, the identity trajectory of Córdoba’s Peronism continued to be overdetermined by a neoliberal discourse which had shaped its local policy by the end of the nineties, and which did not change through the crisis. To sustain such hypothesis, I will analyse the political line of the Córdoba’s Peronism between 2002 and 2003 from the Political Discourse Theory perspective, comparing it diachronically with its 1998 campaign and with the justification of the provincial state reform carried out in 2000, in order to trace the continuity of its political line facing the proliferation of demands that exploded in 2001.

Key words: Peronism from Córdoba, identity trajectory, neoliberal discourse, 2001 crisis.

1. Introducción

ESTE artículo se interroga por la trayectoria identitaria del peronismo cordobés durante los años 2001 y 2002, durante la intensificación del ciclo de protesta y movilización social iniciado a mediados de los noventa. Según la literatura que ha estudiado dicha crisis en sus diversas dimensiones, este fenómeno no provocó transformaciones sustanciales en los elencos de gobierno de los partidos tradicionales a nivel provincial. El caso cordobés parece caer dentro de esta regla, ya que el entonces gobernador De la Sota, líder del peronismo provincial a la cabeza de una alianza conocida como Unión por Córdoba (UpC), fue reelecto en 2003. Deteniéndonos en las implicaciones de esa persistencia, el objetivo aquí es rastrear los modos en que los portavoces de UpC dieron sentido a la crisis y a partir de ahí plantearon posibles soluciones. La conjetura que estructura este artículo es que en 2001 y 2002 la trayectoria identitaria del peronismo cordobés continuó sobredeterminada por un discurso neoliberal que había configurado su propuesta de gobierno provincial a fines de los noventa, y que estableció los marcos de sentido con que este actor político interpretó la crisis.

El artículo plantea en primer lugar algunas notas sobre el desafío teórico que implica el análisis discursivo de situaciones consideradas críticas. A partir de allí, sostiene que las demandas, protestas y movilizaciones de fines de 2001 no poseen un significado intrínseco, sino que éste depende de su articulación en cierta cadena significativa, por lo que se vuelve objeto de una disputa hegemónica. A partir de ahí, se compara la interpretación que realizó el gobierno nacional surgido en 2003, denominado genéricamente como “kirchnerismo”, por un lado, y la que hizo el gobierno de la provincia de Córdoba bajo UpC, por el otro. Mientras el primero caracterizó a las movilizaciones como el resultado de un daño generado por las políticas de apertura y desregulación económica al pueblo asumido como una víctima, el peronismo cordobés a través de los dichos de su portavoz, el entonces gobernador José Manuel De la Sota, consideró aquel momento como una crisis de representación puntual, producto de la mala gestión nacional del gobierno de la Alianza entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (Frepaaso).

Para el peronismo cordobés, el mal gobierno de la Alianza provocó una falta de confianza de la ciudadanía en el Estado que podía resolverse reduciendo “los costes de la política”, al ampliar a nivel nacional la reforma del Estado ya implementada en la provincia de Córdoba en el año 2000.

Analizando específicamente el caso cordobés, se observan allí los trazos de una sobredeterminación neoliberal que expande una lógica empresarial, a la vez de individuación y competencia, a todos los niveles sociales. La crisis de representación a la base de los hechos de diciembre de 2001 podía superarse si se resolvían los problemas de la corrupción y de la falta de eficiencia del sector público mediante la adaptación del aparato estatal al proceso modernizador de la globalización, acercando el modelo de funcionamiento estatal al de una empresa privada.

Para mostrar la continuidad de esta línea política, se analiza también la trayectoria identitaria del peronismo cordobés luego de la movilización, enfocándose en dos momentos puntuales. Por un lado, en el intento de De la Sota de presentarse como candidato presidencial, haciendo campaña fuera de su provincia durante el segundo semestre de 2002. Por el otro, en su presentación a la reelección provincial en el primer semestre de 2003, luego de que se vieran frustrados sus planes nacionales. Por último, se mencionarán algunas conclusiones que puedan extraerse sobre este caso y que pueden contribuir al debate sobre las continuidades y desplazamientos de la historia política contemporánea.

2. Algunas notas teóricas sobre el análisis de discurso y la crisis

El análisis de una trayectoria identitaria a lo largo de un período crítico como el de 2001 se realiza sobre la presunción ontoepistémica de que no hay un sentido preestablecido, fijo e inmanente sobre lo que se constituye como una crisis. Ésta es precisamente vivida como una fragmentación generalizada del plexo de sentidos sobre el que se configuran prácticas y relaciones sedimentadas (Laclau y Zac, 1994). No obstante, en ese proceso se evidencia la necesidad de lecturas que den sentido a aquello que está sucediendo ² y que, *a posteriori*, lo interpretan como una crisis con cierto sentido, extensión e intensidad. De aquí que la misma definición de un evento o serie de eventos como una crisis, y por ende las causas y consecuencias de ésta, no pueden tomarse como un dato con una significación objetiva, sino más bien como parte de una disputa de sentidos (Aboy Carlés, 2001: 53-54). Por caso, en la búsqueda de razones para el incremento

² Por ejemplo, la vinculación entre instancias de crisis y el desarrollo de grandes propuestas teórico-políticas ha sido ya apuntado en numerosas ocasiones dentro de las ciencias sociales. Véase WOLIN (2012).

de la protesta social que desbordó los canales de contención previstos por el gobierno de la Alianza y la sucedánea crisis institucional experimentada en diciembre de 2001 se entrecruzaron diversas interpretaciones sobre la historia reciente, la economía y la dinámica sociopolítica de la Argentina. La mayor o menor profundidad de la ruptura institucional fundamentaba la mayor o menor transformación que se volvía necesario introducir en la Argentina. Como veremos, UpC pretendió acompañar ese “cambio de aires” con una acotada lectura de la innovación política, al mismo tiempo que caracterizaba a la crisis como exclusiva responsabilidad del gobierno aliancista.

Desde la Teoría Política del Discurso (TPD) es primario el estatuto de la dislocación, es decir la existencia de una falla a la base de la sociedad que impide la absoluta identidad de ésta consigo misma (Marchart, 2008). Desde esta perspectiva, una crisis no puede ser una ruptura externa de un orden establecido, como un conjunto de positividad dadas que son conmocionadas por eventos extraños a la lógica de su funcionamiento. Por el contrario, el carácter fallado de lo social es la base sobre la que disputan de modo contingente, pero en el trasfondo de una relativa y desnivelada estructuralidad, diversas cadenas significantes para suturar el sentido de lo social. En efecto, una perspectiva discursiva sobre lo social, esto es, que las relaciones sociales están constitutivamente mediadas por marcos de sentido que son el resultado de prácticas articulatorias, tanto lingüísticas como extralingüísticas (Laclau y Mouffe, 2004), pone de relieve esta caracterización siempre disputada y posterior de lo que es una crisis.

La definición ontológica de discurso como un conjunto relacional de diferencias rechaza la presunción de significados objetivos, inmanentes a los objetos en sí, para subrayar que es la propia articulación entre elementos lo que establece, aunque precariamente, su significado. Al mismo tiempo, esta definición evidencia que el propio conjunto no posee un sentido inmanente, sino que está habitado por una falla estructural. Como ningún elemento de la estructura social posee sentido por sí mismo, sino en relación a otros, y al mismo tiempo, como ese conjunto de diferencias está atravesado por una negatividad inherente, ello supone así que lo social está atravesado por una falla estructural en torno a la cual una pluralidad de relatos pugna por clausurar su sentido (Laclau, 2000, 2008).

Ahora bien, la dislocación posee un carácter cuasiestructural que se evidencia de manera más explícita, en primer lugar, a través de irrupciones

ónticas. No obstante, la imposibilidad ontológica de un completamiento absoluto de sentido en la estructura se manifiesta, en segundo lugar, en la necesaria subversión del significante en el proceso de vaciamiento con el que se establece como punto nodal de una cadena significativa (Laclau, 1996, 2003). En términos analíticos, esto último implica que los discursos específicos que son enunciados por los actores políticos dan sentido a una situación como crítica al incluirla en una cadena significativa (lo que supondría un primer desplazamiento de un supuesto sentido literal de la crisis). Allí, el elemento diferencial de la crisis se vuelve equivalente al resto del conjunto en referencia al punto nodal de ese discurso, que pasa a funcionar como una metáfora de la plenitud de lo social, sobre-determinando el significado de cada uno de los eslabones de la cadena, en constante oposición a un antagonismo que representa aquello que impide tal completamiento. En ese sentido, por ejemplo, reducir la crisis del 2001 a un problema puntual de la Alianza y su incapacidad para gobernar, estaba en relación con una caracterización más general, predominante en UpC, sobre la sociedad argentina, y la cordobesa a su interior. Esta sociedad podría alcanzar su plenitud si continuaba sin errores puntuales como los cometidos por la Alianza el camino de la reforma estatal y la inserción en la dinámica de la globalización financiera, promoviendo una lógica empresarial en todos los ámbitos sociales para lograr transparencia y eficiencia.

Como decíamos, esa disputa por la interpretación de la crisis se produce en un marco relativamente estructurado por prácticas sedimentadas y tradiciones discursivas. En esos momentos es que se evidencia con mayor claridad el carácter dislocado de lo social, y donde pueden observarse cuáles son los relatos que pretenden dar sentido tanto a la sociedad en su conjunto como a la ruptura de ese orden. Como veremos más adelante, las lecturas que los diversos actores políticos realizan sobre estos acontecimientos dependen en mayor o menor medida de sus trayectorias identitarias.

Al tener en cuenta esta dimensión discursiva y conflictiva de los fenómenos políticos es posible analizar a los partidos políticos poniendo de relieve su atravesamiento ideológico. Gran parte de la bibliografía sobre partidos políticos asigna a la dimensión ideológica un lugar secundario y dependiente de los intereses y estrategias de los dirigentes partidarios, que devendrían de una estructura social establecida o de una racionalidad individual instrumental en funcionamiento (Abal Medina, 2004). A partir de los presupuestos ontoepistémicos que desarrollamos más arri-

ba, en nuestra perspectiva, la ideología partidaria no se define como un conjunto delimitado de valores que los dirigentes utilizan de manera más o menos intencionada. Por el contrario, toda institución, constitutivamente descentrada, está atravesada por una dimensión ideológica que configura su comprensión de la realidad sociopolítica (Panizza y Miorelli, 2013).

La categoría de línea política, utilizada de manera marginal por Panebianco (2009: 96-97), ofrece una vía de acceso a dicho atravesamiento. Constituye el relato de los dirigentes partidarios sobre lo que sucede en su contexto social, y sobre lo que se proponen hacer a partir de ese diagnóstico, en una coyuntura de relativa duración, de manera tal de adquirir legitimidad como dirigentes, y poder ser considerados como representantes de la identidad colectiva. Esa línea política, y sobre todo su efectividad, es el resultado de los efectos que la sobredeterminación hegemónica tiene sobre la institución partidaria, ofreciéndose como una interpretación constitutiva del sentido que ese actor político posee en un escenario político determinado. Es parte de una gramática habilitante a la que contribuye, a partir de repeticiones y desplazamientos de sentido, a consolidar y tensionar (Reynares, 2012; 2014). Como veremos más adelante, en una coyuntura interpretada como crítica, la línea política de UpC pretendió dar lugar a cierta novedad, pero preservando los marcos semánticos generales con que el sector interno de De la Sota había consolidado su legitimidad hacia fines de los noventa, cuando superó la fragmentación partidaria en la provincia y configuró la plataforma de gobierno victoriosa en 1998 (Reynares, 2017).

Con esta perspectiva de análisis, en lo que sigue nos detendremos en el modo en que el peronismo cordobés dotó de sentido al fenómeno de 2001, interpretándolo desde una línea política sobredeterminada por un discurso neoliberal. Pero antes, y para contrastarlo, traeremos a colación a la interpretación que el nuevo gobierno nacional emergido en 2003 hizo del mismo ciclo de protestas de 2001.

3. Lecturas sobre el 2001

A fines del año 2001 el gobierno del presidente De la Rúa terminaba abruptamente con su renuncia y la de su gabinete, tras varios días de manifestaciones callejeras que incluyeron la declaración del toque de queda y cuya represión dejó como saldo numerosos muertos y heridos. La situa-

ción económica generalizada de desempleo y pobreza, los actos de corrupción ventilados en el Congreso nacional durante ese mismo año y las medidas económicas llevadas adelante por el Ministro de Economía, Domingo Cavallo, que incluyeron la restricción para el retiro de depósitos bancarios conocida como “el corralito”, suelen ser mencionadas como algunas de las causas puntuales de la crisis. No obstante, este fenómeno fue parte de un ciclo de protesta más amplio, gestado desde la segunda mitad de los noventa, y que se caracterizó por una multiplicidad de demandas contra la dirigencia política que se condensó en la consigna, ampliamente enunciada en las protestas de diciembre de 2001, “que se vayan todos”.

Es posible mencionar algunas características de este fenómeno a partir de lo sucedido en la provincia de Córdoba en el período.³ Las transformaciones estructurales implementadas por la administración de Menem que impactó profundamente en la provincia a partir de la descentralización de áreas centrales como educación y salud fueron resistidas tanto por sindicatos perjudicados por estas medidas, como por nuevas organizaciones sociales compuestas por vecinos autoconvocados y por desocupados (Gordillo et al., 2012). Ya durante la crisis financiera del gobierno de Angeloz, en 1995, hubo grandes movilizaciones sindicales, especialmente de docentes y empleados públicos provinciales. También se registraron amplias expresiones de rechazo y movilización frente a las medidas de ajuste del gasto público implementadas por la recién asumida gestión de Ramón B. Mestre, en la segunda mitad de 1995 (Closa, 2010: 479).⁴

A su vez, la desocupación, la pauperización y marginalización de amplios sectores de la población fueron condiciones de posibilidad para la emergencia y consolidación de actores sociales con nuevos formatos de organización y acción, como también con nuevas demandas de trabajo, alimentos y condiciones de vida dignas. Ya desde mediados de esa década estas organizaciones sociales de piqueteros, trabajadores desocupados y vecinos con fuerte anclaje territorial discutían el carácter excluyente

³ GORDILLO (2010) ha investigado sobre las expresiones de este proceso de movilización y reclamo en algunas provincias argentinas, deteniéndose en el fenómeno de desafección electoral y las resistencias ante la reforma estatal local en Córdoba.

⁴ Las privatizaciones, efectivas o frustradas, de empresas públicas en Córdoba también encontraron resistencia de parte de los sindicatos de las actividades involucradas, aunque con estrategias muy variadas entre 1997 y 2003 (ARRIAGA, 2012; NATALUCCI, 2012).

de las políticas económicas implementadas tanto por el Estado nacional como el provincial (Closa, 2010: 490-491; Franco y Medina, 2012; Natalucci, 2008).

Además del incremento de la acción colectiva de protesta, se evidenció un aumento de la desafección electoral, en lo que se conoció como “voto bronca” (Pousadela, 2004; Herrero, 2011). Esta forma de resistencia, tanto particular como organizada, se expresó en Córdoba en dos elecciones específicas durante 2001: en julio, el plebiscito para convocar a una Reforma de la Constitución de la Provincia de Córdoba que permitiese la reducción de las dos Cámaras de Diputados y Senadores provinciales en una Unicameral; y en septiembre, los comicios para la Convención Constituyente. Allí se registró un fuerte incremento de votos nulos y blancos, como así también una baja asistencia electoral, que se repitieron con mayor importancia en las elecciones legislativas de octubre (Gordillo, 2011). Así, la marcada desafección electoral y la confluencia de la movilización de organizaciones piqueteras con medidas de acción directa como los “cacerolazos” y escraches frente a casas de funcionarios, gobernantes o incluso sus familiares configuraron la coyuntura crítica que eclosionó en diciembre de 2001.

Los estudios sobre este ciclo de protestas apuntan en general que implicó una variedad de efectos políticos en la Argentina.⁵ Enfocándonos en la discursividad desplegada por los actores políticos para la comprensión de los hechos y su posible resolución, se solaparon diversas lecturas. La emergencia de los movimientos piqueteros y la generalizada discusión sobre las políticas económicas de la década de los noventa cambiaron el repertorio de significantes legítimos en la práctica política argentina

⁵ Además de los ya citados sobre el caso específicamente cordobés, existe una enorme variedad de literatura especializada que se interrogó desde diversos enfoques analíticos por el ciclo de protesta de fines de los noventa y comienzos de 2000 y sus efectos sociopolíticos. Allí podemos nombrar, entre otros, a BONNET, 2008; CHERESKY y BLANQUER, 2004; MUÑOZ, 2010; NOVARO, 2003; QUIROGA, 2005; SCHUSTER ET AL., 2005; SVAMPA y PEREYRA, 2003. Respecto a los cambios que “el 2001” implicó en el conjunto de actores políticos formales e informales y las relaciones que entablan entre sí —conocido como sistema político— se considera en términos generales que fueron escasas las implicancias que tuvo el ciclo de protesta en el recambio de elencos dirigenciales que comenzó a establecerse con las elecciones de 2003 (CHERESKY y BLANQUER, 2004; POUSADELA, 2004), o bien que dentro de los heterogéneos efectos a nivel institucional, se verifica la continuidad de algunos de los rasgos centrales del sistema de partidos, como lo son la centralidad del peronismo y su modo de acción político a niveles tanto interno y externo (NOVARO, 2003).

(Muñoz, 2010). En este aspecto, lo sucedido en 2001 evidenció una deslegitimación profunda de las instituciones, visible en el aumento de votos nulos y blancos, como también en las consignas contra la “clase política” que englobaban gran parte de las demandas sociales y que mostraban una insatisfacción generalizada con todas las instancias de organización social tradicionales como los partidos, los sindicatos o los poderes del Estado. Ahora bien, dicho descontento no poseía un sentido intrínseco, y fueron heterogéneas las respuestas que emergieron ante él. El grueso de los análisis existentes se ha concentrado en la interpretación enunciada por el gobierno nacional a cargo de Néstor Kirchner desde 2003, que articuló dichas demandas en una línea política que pretendía consolidar un nuevo vínculo entre gobernantes y gobernados, y que se distinguió de discursos hegemónicos en la década anterior.

Rinesi y Vommaro (2007), al estudiar los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, sostienen que su lectura fue capaz de aunar los efectos políticos del 2001 —y su demanda de cambio y movilización— con los de 2002 —y su deseo de orden comunitario. Los sucesos de 2001 significaron un aumento de la movilización social y política con demandas heterogéneas en torno a la “renovación de las cosas” a través de las que “el componente democrático del ‘mix liberal-democrático’ en el que consiste el sistema político instalado entre nosotros desde los años de la ‘transición’ ha vuelto... a ocupar su sitio frente a... la otra pata de ese mismo sistema: su pata “representativa” y ‘liberal’” (Rinesi y Vommaro, 2007: 456-457).

En efecto, desde aquel momento crítico de 2001 la movilización ocupó un lugar central del escenario político argentino. No obstante, por otra parte, el proceso de restitución de parámetros aceptables de gobernabilidad llevado adelante por la administración provisoria de Duhalde encarnaba una continuidad institucional que se prolongó en el gobierno nacional de Néstor Kirchner. Éste se constituyó en un nuevo “curso reformista en el contexto de una plena continuidad institucional” (Mocca, 2004: 100). Precisamente, la novedad del gobierno de Néstor Kirchner supuso

...una forma muy particular de enlace con el clima social que predominó con posterioridad a la caída de De la Rúa: en procura de consolidar su poder, el presidente Kirchner ha hecho suyos muchos de los motivos predominantes en las grandes movilizaciones populares de 2001 y 2002. La ética pública, la dignidad social de los sectores postergados, la independencia del Poder Judicial, la defensa del interés nacional en las relaciones con los organismos internacionales de crédito y la prioridad otorgada

a los procesos de integración regional en la política argentina insinúan la construcción de un nuevo rumbo a partir de una *reinterpretación de difusos, y a veces contradictorios, reclamos ciudadanos...* (Mocca, 2004: 99-100. Cursivas agregadas).

Fueron *algunas* de esas demandas las articuladas por la emergencia del kirchnerismo en tanto un discurso político en pugna por la hegemonización del escenario luego de la crisis de 2001. Y no sólo eso, sino que el sentido que asumieron esos reclamos “difusos, y a veces contradictorios” estuvo marcado por una cierta articulación significativa que llevó adelante dicho actor político en su línea política. Precisamente, en ella

...Kirchner proponía dejar de lado viejas y perimidas distinciones partidarias y devolverle al Estado un rol prioritario tanto en la economía como en la sociedad. El objetivo, decía, era *reconciliar a la sociedad con la política* a través de un proyecto nacional común que implicara, además, una mejora en la calidad de las instituciones... (Montero y Vincent, 2013: 126. Cursivas agregadas).

En un sentido análogo, Muñoz y Retamozo consideran que

...el gobierno de Kirchner insistió en que un futuro pleno para los argentinos era posible si los poderes del Estado se recuperaban y la voluntad política se ponía al servicio del desarrollo económico industrial, pues ello permitiría crear una sociedad incluyente que repararía los daños infligidos a un pueblo explotado y víctima de abusos... (Muñoz y Retamozo, 2008: 130).

Como vemos, el gobierno nacional surgido de las elecciones de 2003, siguiendo algunos lineamientos ya presentes en la administración provisoria de Duhalde, reconstruyó la legitimidad estatal a partir de una articulación con demandas sociales en torno a la inclusión social y los derechos del “pueblo”. Por lo tanto, los cambios en algunas de las interpretaciones en pugna sobre el repertorio de significantes legítimos que marcamos más arriba como una de las consecuencias de “el 2001” puede ser comprendido no tanto como el resultado de un proceso lineal de absorción institucional de demandas sociales, sino más bien como el efecto de una constitución identitaria parcialmente novedosa. Mediante esta articulación de elementos heterogéneos, el gobierno nacional surgido de las elecciones de 2003 desarrolló una serie de medidas reivindicativas por las que el lazo representativo se cargó de sentido a partir de

una línea política en que el Estado se relegitimaba en su defensa de un pueblo dañado.

Así como el kirchnerismo emergió como *una* respuesta a la crisis, fue una de las tantas posibles. Como acabamos de ver, la proliferación de demandas y el expandido descrédito de la institucionalidad republicana y la clase política no constituyen fenómenos con un sentido inmanente. Así, el peronismo cordobés, que estaba al frente del gobierno cordobés mediante la alianza UpC, interpretó de otra manera lo sucedido y rearticuló en su línea política el significativo de cierta novedad política con la pervivencia de sus valores centrales, aquellos que radicarón a la base de su argumentación neoliberal en pos de un Nuevo Estado provincial en 2000.

El líder y portavoz del peronismo mediterráneo, el entonces gobernador de la provincia, José Manuel De la Sota, consideraba que era necesaria la reconciliación social que superase el hastío ciudadano —lo que usualmente se denominó como “crisis de representación”— y subrayaba al igual que Néstor Kirchner la necesidad de implementar un modelo económico basado en la producción industrial. Sin embargo, la redefinición de ese vínculo entre Estado y ciudadanía continuaba la misma senda que ya había utilizado para justificar la reforma estatal y la reducción impositiva llevadas adelante en la administración de UpC en 2000 y 2001.

En este sentido, la línea política del peronismo de Córdoba sostuvo, inmediatamente después de diciembre de 2001, la necesidad de trasladar al terreno nacional los cambios que había realizado en su distrito. De ese modo, identificaba el mismo diagnóstico en la crisis del país con lo sucedido en Córdoba en 1998, cuando UpC accedió al gobierno provincial. El problema de la desidentificación ciudadana, de la crisis de representatividad institucional, se resolvía así con los mismos remedios: la introducción del Estado en una lógica empresarial de mercado. En lo que sigue nos centraremos en el modo en que este actor político interpretó la problemática marcada por los acontecimientos de 2001 y su posible solución.

4. Mismos problemas, mismas soluciones

Una vez elegido Eduardo Duhalde como Presidente provisorio por la Asamblea Legislativa a fines de diciembre de 2001, el entonces gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, pretendió asumir un rol destaca-

do en la escena nacional, exigiendo, por ejemplo, la resolución del “corralito bancario” a partir de la participación accionaria de los ahorristas.⁶ En ese contexto, el gobernador cordobés se presentó como un posible precandidato a la presidencia. El hecho de contar con más de dos décadas de trayectoria dentro del peronismo y de ser gobernador de una de las provincias más importantes del país, lo ubicaba en una posición estratégica ante el escenario que se abría con la debacle aliancista y el gobierno transicional de Duhalde. Durante 2002, pretendió hacerse conocido fuera de las fronteras provinciales. En suma, hablaba como un candidato a presidente a la vez que como gobernador.

Esta situación se acentuó en el segundo semestre de 2002, cuando, tras la renuncia de Carlos Reutemann como precandidato para la presidencia,⁷ De la Sota inició giras por otras provincias, sobre todo Buenos Aires, para hacer campaña y cosechar apoyos electorales. Incluso entre agosto y noviembre de 2002 tomó licencia de su cargo, dejando al entonces titular de la Legislatura provincial, Herman Olivero, a cargo de la gobernación.⁸ Sin embargo, los escasos resultados en sondeos y encuestas, además del renuente apoyo del gobierno de Duhalde, lo obligaron en enero de 2003 a dar un paso al costado de la disputa electoral. En ese contexto, otro de los candidatos, el santacruceño Kirchner se presentó como candidato del gobierno, resultando a la postre elegido presidente luego de que Menem, vencedor en la primera vuelta, renunciara a competir en el *ballotage*. A partir de allí, entre febrero y junio de 2003, De la Sota consolidó su figura interna en el peronismo cordobés y se presentó a la reelección en junio de ese año, ganándolo al candidato radical, Oscar Aguad, por una impor-

⁶ El “corralito bancario” fue una medida tomada por el Ministerio de Economía de la Nación en diciembre de 2001, que impedía a los ahorristas retirar su dinero de los bancos, permitiendo sólo la extracción hasta un límite de \$250 semanales. Ello generó gran incertidumbre y ayudó a acelerar la movilización social presente a fines de ese año.

⁷ Reutemann era en ese momento gobernador de Santa Fe por segunda vez. Había llegado a la actividad política luego de una extensa carrera como piloto de carreras que lo había hecho famoso durante los setenta y ochenta en todo el país. Ello le daba cierta ventaja respecto a otros dirigentes en la competencia por la precandidatura presidencial por los altos niveles de exposición de su figura. Sin embargo, decidió no participar de la campaña de 2003.

⁸ En 2002 la provincia de Córdoba no tenía vicegobernador, ya que el elegido para dicho cargo, Germán Kammerath, había sido elegido posteriormente como intendente de la capital provincial.

tante mayoría, ya que dichos comicios fueron, a un tiempo, el mejor resultado del peronismo desde el retorno democrático, y la peor elección del radicalismo en toda su historia.

De este modo, el peronismo cordobés durante el período inmediatamente posterior a la crisis de 2001 debe pensarse en estrecha relación con la dinámica política nacional, atravesada por la multiplicación de candidaturas y una difícil situación económica y social. Es así que en la discursividad puesta en juego por De la Sota en tanto potencial precandidato a presidente rastreamos algunas líneas de continuidad y desplazamiento de su línea política en la interpretación de lo que causó e implicó el ciclo de protestas que alcanzó su punto álgido en diciembre de 2001.

El momento más tenso de la crisis generalizada de 2001 no supuso un cambio profundo en el marco de sentido en que el peronismo cordobés pretendió encuadrar la lectura de la situación y el conjunto de medidas para solucionarlo, es decir, la línea política del partido. La alusión en el mensaje de apertura legislativa de 2003 a diciembre de 2001 como pura responsabilidad de la gestión nacional de la Alianza es una muestra de la validez de las políticas implementadas durante los noventa:

... sus desaciertos [los del gobierno de Fernando De la Rúa] fueron causa de que una recesión, que muchos consideraron pasajera, derivara en una verdadera catástrofe, tanto económica como institucional. Infelizmente, el 2002 será recordado como una verdadera tragedia para nuestra Nación (Mensaje de apertura del ciclo legislativo, en el diario *La Voz del Interior*, 01/02/2003).

No se registraba en las palabras del gobernador una crítica frontal a las políticas económicas de la década precedente, sino que se definía un culpable particular, el gobierno de la Alianza entre 1999 y 2001. Éste había provocado, con su incapacidad, que una recesión pasajera deviniera una catástrofe que había continuado en 2002. Este carácter circunstancial de la crisis de 2001 se acompañaba, en las palabras de De la Sota, con otra clave de interpretación que otorgaba máxima responsabilidad de la crisis a los altos “costos de la política”. En la apertura de sesiones legislativas provinciales de 2002, De la Sota defendía las medidas llevadas adelante por su gobierno en materia de reducción del gasto público provincial, y pretendía profundizarlas a nivel nacional:

...estoy plenamente convencido de que nuestro país no podrá salir de la grave crisis económica que lo afecta si no baja sus impuestos, si la Cámara de Senadores y Diputados de la Nación gastaran la mitad, si eliminára-

mos todas las reparticiones públicas nacionales superpuestas, si el Poder Judicial de la Nación rebajara en un 30 % sus gastos... (Mensaje de apertura del ciclo legislativo, en diario *La Voz del Interior*, en *La Voz del Interior*, 01/02/2002).

En ese sentido, las propuestas con que De la Sota se perfilaba como candidato a nivel nacional durante el primer semestre de 2002 continuaban el sentido establecido por las medidas de gobierno implementadas en la provincia, esto es, reducción impositiva, reforma del Estado y rebaja de “los gastos de la política”. Ésta era interpretada como una actividad costosa e ineficiente en relación a aquellos individuos que pagaban para obtener un servicio de calidad, los contribuyentes y clientes del Estado. Por eso, era necesario reducir lo que gastaban los parlamentarios y los funcionarios judiciales, además de volver más eficiente la estructura administrativa.

De ese modo, De la Sota ofrecía una solución a la crisis que revelaba cuáles eran, en su interpretación, sus causas. Al hacer énfasis en la reducción de gastos mediante la reforma estatal, el problema de la Argentina emergía de un deficiente marco institucional y de un gasto público excesivo. Al reunir el conjunto de críticas proliferantes en 2001 bajo el tópico de “los costos de la política”, De la Sota retomaba significantes ya ampliamente articulados en su experiencia de gobierno en Córdoba, más específicamente durante la reforma estatal de principios del año 2000, y que habían ocupado un lugar central de su línea política durante los noventa. Al realizar una comparación diacrónica de la trayectoria identitaria del peronismo cordobés entre 1998 y 2002 es posible observar la continuidad de los marcos de sentido en que se integraba su interpretación de lo sucedido a nivel nacional.

En efecto, la propuesta que lleva De la Sota a nivel nacional en 2002 comparte el mismo diagnóstico con el que justificó la reforma del Estado provincial que había encabezado desde el inicio de su administración en 1998. La fundamentación de estas reformas se concentró en la plataforma de gobierno de UpC, en un documento llamado “Córdoba Nuevo Siglo”, como así también en los proyectos de ley de la reforma del Estado, denominada “Córdoba Nuevo Estado”, durante el año 2000.⁹ Allí, el pe-

⁹ Aquí nos referimos a las leyes 8835/00, 8836/00 y 8837/00, llamadas “Carta del Ciudadano”, de “Modernización del Estado” y de “Incorporación de capital privado al sector público”, respectivamente, a través de las cuales el Ejecutivo provincial encabezado por De la Sota implementó la transformación del Estado cordobés.

ronismo de Córdoba legitimó parte de la política pública implementada durante su gobierno como un modo de reformular un nuevo contrato social con la ciudadanía cordobesa a partir de la expansión de una lógica empresarial en el Estado.

En 1998, la principal crítica de UpC al gobierno radical saliente residía en el carácter autoritario de la política del anterior gobernador, el radical Ramón B. Mestre, y la mala administración que había provocado un serio desequilibrio fiscal. Así, el diagnóstico era que “... Córdoba cobre los impuestos más altos de todo el país, sin que ofrezca servicios públicos a la altura de esos impuestos... [y] el aumento de la deuda pública del Estado... e incluso ... la creciente evasión de impuestos” (Plan de Gobierno “Córdoba Nuevo Siglo” [CNS], p. 3). La solución principal radicaba entonces en dar transparencia a la gestión pública al poner a disposición de los interesados —aquellos que ponían su dinero en el Estado, los contribuyentes— los canales de información necesarios para controlar a los funcionarios, cuya corrupción provocaba la ineficiencia y por ende el desequilibrio. La disponibilidad de los datos, habilitada por la tecnología que permitiría “vincular en una misma base de datos a los tres poderes del gobierno garantizando el acceso de la ciudadanía a los servicios” (CNS, p. 7), impediría el uso de los recursos de todos para beneficio de unos pocos.

Tanto en 1998 como en 2001, la “crisis de representación” era el resultado, en la interpretación de UpC, de una falta de confianza ciudadana. En ese contexto, el único modo de volver aceptable, legítimo, al aparato estatal era mediante la inclusión de nuevas formas de participación en que el ciudadano asumiera la figura de un cliente/empresario, cuidando la inversión que suponía el pago de impuestos, a través del control de los servicios públicos. Para adquirir legitimidad el Estado debía adecuar su dinámica a la de una empresa en el mercado, subsumiéndose bajo su lógica formal de competencia (Reynares, 2014). El lazo representativo podía volver a construirse si el Estado funcionaba como una empresa, y si se promovían las condiciones contextuales para que los ciudadanos pudiesen erigirse en inversores que controlaran el objeto de su inversión, es decir, si se ampliaba la lógica de mercado al interior del Estado. El ciudadano no era sujeto de derechos sino un inversor, cliente y consumidor de bienes. Ello volvía posible la defensa de la reforma estatal provincial en que

“no sólo servicios tales como la provisión de energía eléctrica o agua potable estarán en Córdoba sujetos a controles y evaluaciones objetivas; también otros tales como el funcionamiento de las escuelas o los hospita-

les públicos deberán esforzarse por alcanzar la satisfacción del usuario o consumidor” (Secretaría General de la Gobernación, Olga Riutort, en *La Voz del Interior*, 17/02/2000).

La lectura de los problemas de 2001 centralizada en los “costos de la política” adquiriría sentido al interior de un discurso similar, y por consiguiente sus soluciones estaban sobredeterminadas por un discurso político que propugnaba la expansión de la “forma mercado” en todos los ámbitos de la vida en común. Este discurso no delimita el ámbito del Estado frente al mercado, sino que promueve la lógica de este último, de manera artificial, al interior de la institución estatal: “...el mercado, o, mejor, la competencia pura, que es la esencia misma del mercado, sólo puede aparecer si es producida, y si es producida por una gubernamentalidad activa” (Foucault, 2007: 154). El mercado pasa así de ser principio de limitación del gobierno y el alcance del Estado a ser su principio de regulación y organización.

La relegitimación del Estado frente a la ciudadanía en esta clave neoliberal no sólo supone la transformación del Estado subsumiéndolo bajo el parámetro de la competencia de mercado. También apunta a la resignificación del ciudadano como un individuo emprendedor: “...*homo oeconomicus* como sujeto de competencia que funciona como la condición no natural para el pleno desarrollo del juego también artificial del mercado” (Rossi y Blengino, 2011: 34). El ciudadano en el discurso neoliberal puede volver a confiar en las instituciones si éstas establecen las condiciones ambientales que impulsan la forma de la competencia en espacios diversos bajo la lógica expandida del mercado. El mencionado *homo oeconomicus* es construido en este contexto como “empresario de sí mismo, que es su propio capital, su propio productor y la fuente de sus ingresos” (Foucault, 2007: 265).

Los problemas relacionados con la desconfianza ciudadana en las instituciones estatales de la provincia, y luego de la nación, eran interpretados de esa manera por el peronismo cordobés a través de un diagnóstico neoliberal que contrastaba la transparencia y suficiencia de la sociedad civil, configurada por la forma mercado y su lógica de la competencia, con la opacidad y desequilibrio del Estado y los partidos políticos. A partir de dicha lectura se desprendía una solución apropiada, que consideraba que era posible reconstruir dicho vínculo debilitado al expandir la lógica empresarial al terreno del Estado. Es decir, los ciudadanos en tanto contribuyentes/inversores confiarían en el Estado si éste se mostrara como una empresa eficiente, reduciendo sus costes y optimizando sus beneficios. En

este marco, la actividad representativa de Diputados y Senadores debía reducir costos, como así también la de los funcionarios judiciales o las reparticiones públicas. El imperativo de la reducción de los costos de la política implicaba una reducción de ésta a la gestión, y su calificación exclusivamente en términos de calidad y eficiencia.

5. Cambiar en la continuidad

Vimos más arriba que el ciclo de protestas cuyo punto más álgido se registró en el verano de 2001/2002 estuvo abierto a múltiples interpretaciones sobre sus causas, y de modo concomitante, sobre sus posibles soluciones. El portavoz del peronismo cordobés sostuvo en dicha lectura una significación sobredeterminada por un discurso neoliberal por el que la crisis se resolvía reformando al Estado para modelarlo bajo una forma empresa que recuperara la confianza de los ciudadanos bajo un modelo de contribuyentes/inversores. La línea política puesta en juego durante la campaña para gobernador de Córdoba en 2003 siguió carriles similares. En un contexto marcado por el debilitamiento de la UCR como principal fuerza opositora, el equilibrio de las finanzas provinciales y el proceso de recambio gubernamental nacional, la campaña del peronismo cordobés para la gobernación de 2003 sostuvo el grueso de su propuesta para la reelección en la continuidad de las políticas de la gestión, con el anuncio de un ambicioso plan de obras públicas. A ello le sumó nuevas exenciones impositivas, en línea con la reducción tributaria del 30% que había planteado en la campaña anterior, durante 1998, aunque en este caso para promover inversiones regionales (*La Voz del Interior*, 03/05/2003).

En el cierre de la campaña, el gobernador planteaba que Córdoba era “la provincia que tiene los impuestos más baratos de la Argentina y que paga los sueldos más altos de todo el país” (en *La Voz del Interior*, 06/06/2003). Tanto la enumeración de medidas concretas como la defensa de su gestión en clave puramente económica, remarcando el beneficio entre los mejores salarios y los impuestos más bajos, señalan el modo en que se interpretaba la defensa de la gestión y se mostraba el posible atractivo electoral de su línea política. La cuantificación de la gestión se centraba en la mejora en la provisión de servicios, interpretada como la satisfacción de los contribuyentes, en tanto clientes de una empresa:

...Es hora también que debatamos *la calidad de la atención* que brindan los funcionarios y empleados públicos, a quienes *el pueblo mantiene*

con sus impuestos... Queremos debatir las ideas modernizadoras del Estado que venimos ejecutando desde 1999, con tantas trabas y dificultades producidas por quienes se niegan al cambio. Es hora que *el pueblo sea bien atendido por el Estado Provincial y Nacional* (Discurso de asunción del segundo período, en *La Voz del Interior*, 12/07/2003. Cursivas agregadas).

La defensa de la reforma estatal impulsada en los primeros años de su gestión apuntaba a un Estado que debía atender al pueblo, porque éste lo mantenía con sus impuestos. De este modo, como en la fundamentación de la reforma implementada en el año 2000, se volvía a plantear un sentido legítimo del Estado como empresa eficiente para reconstituir el lazo entre gobernados y gobernantes. En ese movimiento, el pueblo se componía por aquellas personas capaces de pagar los impuestos, aquellos que, poseyendo algún nivel de competencia en el mercado, debían ser tenidos en cuenta ya que disponían de su dinero para la pervivencia de la institución.¹⁰ El pueblo era definido por la incidencia de la contribución, y no por la titularidad de derechos de sus integrantes.

La continuidad de la sobredeterminación neoliberal en la línea política del peronismo cordobés a cargo del gobierno provincial puede observarse en el desplazamiento de significantes alrededor de una forma empresa, que contamina sentidos particulares y los vuelve equivalentes. Por caso, en su discurso de asunción, De la Sota interpretaba que existían aún dos Córdobas, una que incluye “a los más pobres. Al padre que se preocupa por alimentar a sus hijos, a la madre que sufre con su bebé enfermo, a la joven que pone todo su empeño en ingresar a la Universidad, al muchacho que busca trabajo y no lo encuentra” y otra “Córdoba rica, repleta de historia y de futuro. La de las cosechas récord, de las múltiples universidades, de la industria moderna y exportadora, de los buenos ingresos y rentabilidades”. En ese panorama, De la Sota sostenía que su objetivo era que “*todos unidos hagamos nacer una sola Córdoba, donde todos puedan sonreír, todos puedan estudiar, todos puedan trabajar, prosperar, ahorrar e invertir. Una Córdoba donde todos podamos ser felices.*” (Discurso de asunción del segundo período, en *La Voz del Interior*, 12/07/2003. Cursivas agregadas).

¹⁰ Esta específica semantización de la ciudadanía puede observarse en las leyes de reforma estatal de la Provincia de Córdoba, más específicamente, en la Ley Provincial N° 8835/00, titulada “Carta del Ciudadano”. Para un análisis específico de esta legislación, véase YUSZCYK (2010).

La meta que se trazaba el reelecto gobernador era que cada uno de los individuos particulares que vivían en la provincia, sean pobres o ricos, pero siempre activos y emprendedores, fuesen felices. Para que lo fueran, debían ser capaces en última instancia de “invertir”. La capacidad de inversión, entonces, valía como parámetro general al que todos los cordobeses, sin importar condición social, de género o ubicación geográfica, debían dirigirse. Además, la capacidad de inversión suponía, finalmente, la felicidad. La inclusión del verbo “invertir” en la enumeración enunciada por De la Sota desplazaba entonces al resto de las acciones anteriores, específicas, volviéndolas equivalentes dentro de un discurso centrado en la inversión típica de una empresa.¹¹ Este enunciado mostraba que el objetivo de la acción estatal, según De la Sota, era la producción de condiciones para que los habitantes pudiesen comportarse como inversores, desplazando así cada situación particular: la de los padres con sus hijos, la de la estudiante universitaria, la del joven en busca de trabajo al interior de una cadena articulada en torno a la forma-empresa.

Como hemos visto en la primera parte de este artículo, el deseo de cambio generalizado, de cierta “renovación de las cosas”, fue uno de los principales significantes emergentes del ciclo de protesta de 2001 y 2002. Ante ello, la capacidad de reacción del peronismo ante los cambios en las expectativas de la ciudadanía que circulaban de maneras diversas en el espacio público luego del 2001 se hizo evidente en algunas definiciones. Al asumir un nuevo período de gobierno, De la Sota a la cabeza del peronismo cordobés se esforzó por mostrarse *nuevo*, aun en la continuidad del mismo actor político. Dicha *novedad* se reducía a cierta renovación generacional, ya que la mayoría de los ministros eran “jóvenes y preparados”. De este modo, De la Sota planteaba que

Esta tarde asumiré un nuevo Gabinete, *que tiene un promedio de edad de sólo 45 años*. Es el gobierno del cambio en la continuidad. Así como la

¹¹ Este desplazamiento bajo la supuesta universalidad del formato empresarial puede observarse en el siguiente fragmento de la plataforma electoral en los comicios de 1998: “Nuestro programa está basado en el sentido común. En materia de gasto haremos como en nuestro hogar: primero lo necesario. Si nos endeudamos será para capitalizarnos” (*Córdoba Nuevo Siglo*, p. 6). En la plataforma de UpC, el sentido común era relacionado a un tipo de hogar que manejaría sus recursos como una firma comercial, que justifica sus deudas cuando éstas son para capitalizarse. En un mismo movimiento se dejaba a la luz cuál era el mecanismo financiero legítimo y que debía ser adaptado por el Estado imitando a aquellos hogares, que parecían ya remedar a las empresas.

Argentina eligió cambiar, Córdoba eligió seguir cambiando ... todos tienen formación política, todos se han preparado para gobernar el Estado, porque todos tienen voluntad de *cambiar en la continuidad* (...) a partir de ahora *la responsabilidad del éxito* es de cada uno de ellos [de los ministros]... Tienen hoy la oportunidad, siendo una generación joven, preparada, y decente de llevar adelante los programas que el pueblo votó el 8 de junio pasado y seguramente lo harán con muchísimo éxito (en *La Voz del Interior*, 12/07/2003. Cursivas agregadas).

En este pasaje se evidencia el intento explícito por adaptar el mensaje político a ciertos cambios en el contexto nacional e internacional. Ello basculaba entre dos extremos de una dicotomía, la de cambiar y continuar, conjugada bajo el imperativo de mejorar. Por eso, los que votaron a Unión por Córdoba elegían cambiar en la continuidad, que suponía mantener lo bueno y mejorar los errores de la gestión anterior.


Ahora bien, dejando de lado el argumento electoral más obvio, la “renovación de las cosas” se cargaba de un sentido accesorio, ya que podía ser satisfecho simplemente por la aparente juventud de los integrantes del nuevo gabinete de ministros, que contaba con un promedio de edad relativamente bajo. En este último punto, la continuidad de la sobredeterminación neoliberal se expresa en el carácter marginal que la línea política del peronismo cordobés asigna a los cambios que implicó la crisis de 2001. Así como los acontecimientos de aquel año sólo eran el resultado de una mala gestión del gobierno nacional de De la Rúa, el alcance del entusiasmo transformador que había provocado era muy limitado, y se resolvía con personas jóvenes. La renovación se reducía a una cuestión etaria, donde se entendía el cambio como una evolución que debía ser enfrentada por nuevas generaciones, lisa y llanamente con menos años de vida. Además, dicho rejuvenecimiento de la política cordobesa era cargado con otros sentidos precisos, como la *decencia* y la *preparación*, pero sobre todo cada uno de los ministros era presentado como un individuo que debía responsabilizarse de su propio éxito. Esta capacidad era la que los hacía sobresalir para ocupar cargos gubernamentales a pesar de su corta edad. De este modo, la interpretación de la novedad no sólo se diluía en un factor generacional, sino que esa misma transformación adquiriría sentido en un discurso articulado en torno a una forma empresa que volvía a cada individuo, ahora joven empresario de sí mismo, responsable del éxito, o del fracaso, que pudiesen alcanzar.

6. Algunas notas para concluir

Luego de los hechos de 2001, que marcaron el cénit del ciclo de movilización y protesta iniciado varios años antes, la línea política del peronismo cordobés persistió en un marco de sentido parcialmente determinado por su trayectoria identitaria de los últimos años, para interpretar la situación nacional y ofrecer una solución *adecuada*. En efecto, la falta de representatividad que aquejaba a las instituciones argentinas podía ser resuelta si se introducían medidas que expandían una lógica empresarial en la administración pública, en la creación de políticas públicas y en el modo en que el Estado se relacionaba con los ciudadanos en tanto contribuyentes/inversores, reduciendo los costos de la política y asegurando una gestión más eficiente de lo público. Así, los hechos de 2001 eran interpretados por el peronismo cordobés como parte de una crisis de representatividad cuya solución radicaba en la ampliación de la lógica neoliberal en curso, y que ya había sido desplegada por el gobierno cordobés a cargo de De la Sota en las reformas del año 2000. El proyecto del peronismo cordobés seguía sosteniéndose en la necesidad de reformar la organización estatal bajo una lógica de empresa, es decir, de la competencia entre individuos pensados como “empresarios de sí mismos”. Dicha retracción de los “gastos de la política” se presentaba al mismo tiempo como un propósito económico de ahorro de recursos públicos, y como un vehículo para reconstruir la “confianza ciudadana” en el Estado.

Además, la reducción del pueblo al conjunto de inversores/contribuyentes, y la pretensión de responder a las demandas de renovación política presentando un gabinete de gobierno más joven y responsable de su propio éxito, señalan la continuidad de una interpretación neoliberal a la base de la línea política del peronismo cordobés. En esta lectura, las causas del 2001 radicaron en un problema de gestión del entonces presidente en ejercicio, y los alcances de la crisis fueron exiguos y, en cierto sentido, repetitivos: una crisis de representación que debía resolverse con mayor eficiencia, transparencia y proveyendo las condiciones para el comportamiento competitivo de los individuos ciudadanos.

Toda crisis está constitutivamente abierta a la disputa de sentidos en torno a ella. Así como el gobierno nacional liderado por Néstor Kirchner interpretó al 2001 como la expresión del fracaso neoliberal y como una síntesis del daño que le generaba al pueblo la política económica de los gobiernos anteriores, la lectura del peronismo cordobés a la cabeza del Estado provincial fue la continuidad de un diagnóstico neoliberal sobre

una nueva “crisis de representación”. Esta diversidad de lecturas introduce un matiz en aquellos estudios, y más en general en una clave de lectura sobre las últimas décadas en la Argentina, que han visto en los hechos de 2001 un parteaguas histórico. Esto no implica, en absoluto, desmerecer la importancia de aquellas jornadas, sino, por el contrario, subrayar la importancia que conlleva la disputa por su significación. Si bien “el 2001” señaló notables cambios en la política económica nacional, sería un error equipararlo con el fin de la hegemonía neoliberal. Ello adquiriría sentido, en primer lugar, si se caracterizase al neoliberalismo como un conjunto de políticas económicas delimitado y externo a los actores que lo llevan a cabo; y, en segundo lugar, si sólo se asumiera a la política argentina en clave nacional, desconociendo la complejidad de los casos provinciales y locales. Se vuelve necesario profundizar el debate sobre la historia política argentina contemporánea, poniendo en discusión hasta qué punto es posible hablar de una ruptura homogénea de la “hegemonía neoliberal” a nivel nacional en 2001, sin prestar atención a las trayectorias identitarias de los actores políticos en los diversos escenarios subnacionales que dieron sentido a aquellos sucesos. 

7. Bibliografía

- ABAL MEDINA, J. M. (2004). *Los partidos políticos, ¿un mal necesario?* Buenos Aires: Capital Intelectual.
- ABOY CARLÉS, G. (2001). *Las dos fronteras de la democracia argentina*. Buenos Aires: Homo Sapiens.
- ARRIAGA, A. (2012). “Las luchas contra la privatización de los servicios públicos en Córdoba: dos experiencias de sindicalismo «militante»”. En: GORDILLO, M. (et al). *La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo*. Córdoba: Ferreyra Editor.
- BONNET, A. (2008). *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en la Argentina 1989-2001*. Buenos Aires: Prometeo.
- CHERESKY, I. y BLANQUER, J. M. (2004) *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada*. Rosario: Homo Sapiens.
- CLOSA, G. (2010). “La recuperación de la democracia y los gobiernos radicales. Angeloz y Mestre (1983-1999)”. En: TCACH, C. (coord.). *Córdoba Bicentenario. Claves de su historia contemporánea*. Córdoba: Centro de Estudios Avanzados.
- FOUCAULT, M. (2007). *Nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- FRANCO, M. J. y MEDINA, L. (2012). “Villeros, vecinos y desocupados en el escenario de protestas en Córdoba (1989-2003)”. En: GORDILLO, M. (et al). *La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo*. Córdoba: Ferreyra Editor.

- GORDILLO, M. (2010). *Piquetes y cacerolas... el "argentinazo del 2001"*. Buenos Aires: Sudamericana.
- . (2011). "Las temporalidades del 2001". En: *Revista Estudios*, N° 26, pp. 25-41.
- GORDILLO, M.; ARRIAGA, A.; FRANCO, M., MEDINA, L.; NATALUCCI, A. y SOLIS, A. (2012). *La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo*. Córdoba: Ferreyra Editor.
- HERRERO, F. (2011). "¿Pasividad desesperada o protesta astuta? ¿Desperdicio o mensaje a la clase política? Intervenciones sobre cómo pensar el «voto bronca» en el momento previo a las elecciones nacionales de 2001". En: *Revista Estudios*, N° 26, pp. 43-58.
- LACLAU, E. (1996). "¿Por qué los significantes vacíos son importantes para la política?" En: *Emancipación y diferencia*. Buenos Aires: Ariel.
- . (2000 [1990]). *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Editorial Nueva Visión.
- . (2003). "Estructura, historia y lo político". En BUTLER, J.; LACLAU, E. y ZIZEK, S. *Contingencia, hegemonía y universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Hegemónica.
- . (2008). *La razón populista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica
- LACLAU, E. y MOUFFE, C. (2004 [1987]). *Hegemonía y Estrategia Socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- LACLAU, E. y ZAC, L. (1994). "Minding the Gap: The Subject of Politics", en Laclau, E. (ed.) *The making of political identities*. Londres: Verso.
- MARCHART, O. (2008). *El pensamiento político posfundacional. La diferencia política en Nancy, Lefort, Badiou y Laclau*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- MOCCA, E. (2004). "Los partidos políticos: entre el derrumbe y la oportunidad", en Cheresky, Isidoro y Blanquer, Jean-Michel *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada*. Rosario: Homo Sapiens.
- MONTERO, A. S. y VINCENT, L. (2013). "Del 'peronismo impuro' al 'kirchnerismo puro': la construcción de una nueva identidad política durante la presidencia de Néstor Kirchner en Argentina (2003-2007)". En: revista *Post-Data*, Rosario, Vol. 18, N°1, pp. 123-157.
- MUÑOZ, M. A. y RETAMOZO, M. (2008). "Hegemonía y discurso en la Argentina contemporánea. Efectos políticos de los usos de "pueblo" en la retórica de Néstor Kirchner". En: revista *Perfiles Latinoamericanos*, N° 31, pp. 121-149.
- MUÑOZ, M. A. (2010). *Sísifo en Argentina. Orden, conflicto y sujetos políticos*. Villa María: Eduvim.
- NATALUCCI, A. (2008). "Movilización, acción territorial y nuevas gramáticas de la política: Las huellas de la experiencia piquetera. El caso de Córdoba, 1994-2003". V Jornadas de Sociología de la UNLP, La Plata. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.6276/ev.6276.pdf
- NATALUCCI, A. (2012). "Estrategias del Sindicato de Empleados Públicos y de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba ante las políticas de reforma del Estado

- (Córdoba, 1995 – 2001)”, en Gordillo M. (et Al.) *La protesta frente a las reformas neoliberales en la Córdoba de fin de siglo*. Córdoba: Ferreyra Editor.
- NOVARO, M. (2003). “Continuidades y discontinuidades tras el derrumbe político”. En: revista SAAP, Vol. 1, N° 2, Buenos Aires.
- PANEBIANCO, A. (2009 [1982]). *Modelos de partido*. Madrid: Alianza Editorial.
- PANIZZA, F. y MIORELLI, R. (2013). “Taking discourse seriously: Discursive Institutionalism and Post-structuralist Discourse Theory”. En: revista *Political Studies*, Vol. 61 (2), 301-318.
- POUSADELA, I. (2004). “Los partidos políticos han muerto. ¡Larga vida a los partidos!”. En: CHERESKY, I. y BLANQUER, J-M. (comps.). *¿Qué cambió en la política argentina? Elecciones, instituciones y ciudadanía en perspectiva comparada*. Rosario: Homo Sapiens.
- QUIROGA, H. (2005). “La reconstrucción de la democracia argentina”. En: *Nueva historia Argentina*. Tomo X, capítulo II, pp. 87 a 155. Buenos Aires: Sudamericana.
- REYNARES, J. M. (2012). “La dimensión ideológica en el estudio de los partidos políticos. Una propuesta de lectura”. En: *Revista Trazos Universitarios*, publicación de la Universidad Católica de Santiago del Estero.
- . (2014). “Teoría política del discurso e identidades políticas: Algunas consideraciones epistemológicas”. En: *Revista Pensar. Epistemología y Ciencias Sociales*. Rosario, N° 8.
- . (2017). *El neoliberalismo cordobés. La trayectoria identitaria del peronismo provincial entre 1987 y 2003*. Editorial del CEA, UNC, Córdoba.
- RINESI, E.; NARDACCHIONE, G. y VOMMARO, G. (2007). *Los lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos recientes en la Argentina reciente*. Buenos Aires: Prometeo.
- ROSSI, M. Á. y BLENGINO, L. F. (2011). “La lógica del neoliberalismo a partir de la interlocución de Immanuel Kant y la impronta de Michel Foucault”. En: ROSSI, M. Á. y LÓPEZ, A. (comps.). *Crisis y metamorfosis del Estado argentino: el paradigma neoliberal en los noventa*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.
- ROSSI, M. A. y LÓPEZ, A. (2011). *Crisis y metamorfosis del Estado argentino: el paradigma neoliberal en los noventa*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.
- SCHUSTER, F.; NAISHTAT, F.; NARDACCHIONE, G. y PEREYRA, S. (comps.) (2005). *Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.
- SVAMPA, M. y PEREYRA, S. (2003). *Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- WOLIN, S. (2012 [2004]). *Política y perspectiva. Continuidad e innovación en el pensamiento político occidental*. México: Fondo de Cultura Económica.
- YUSZCZYK, E. (2008). *Reforma del Estado y Ciudadanía en Córdoba. Un análisis de los discursos políticos de Angeloz, Mestre y De la Sota*. Tesis de Maestría en Adminis-

tración Pública. Córdoba: Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública, UNC.

8. Fuentes

La Voz del Interior, versión en papel y digital, entre 2001 y 2003.

Programa de Gobierno - Córdoba Nuevo Siglo [CNS], de Unión por Córdoba, 1998.

Ley Provincial N° 8835/00 - Carta del Ciudadano.

Ley Provincial N° 8836/00 - Modernización del Estado.

Ley provincial N° 8837/00 - Incorporación de capital privado al sector público.

Fecha de recepción: 24/05/2017

Fecha de aceptación: 09/08/2017